

POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA

Juan Manuel Ruiz García

Nuestro compañero Pedro Arrojo acaba de recibir el Premio Goldman por sus actividades científicas y sociales en defensa de los valores culturales y ambientales del agua en España. Físico de formación y profesor de economía, a través de su trabajo como presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua ha sabido enseñar la esencia compleja y plural del agua, en un país demasiado acostumbrado a dar la espalda a sus ríos y acuíferos y a considerarlos únicamente cuando de ellos pudiera extraerse algún tipo de rendimiento económico. Más allá de los valores puramente crematísticos de las aguas, él y sus colaboradores, al igual que tantos amigos que con él han trabajado y luchado por proteger los ríos españoles, han sabido conjugar en sus actividades y reflexiones la realidad diversa de un líquido tan esencial para el mantenimiento de la vida, como necesario para la sociedad. Sus intentos por conjugar valores e intereses en conflicto, por acordar soluciones y respuestas en torno a las decisiones que las Administraciones hidráulicas españolas están adoptando en la gestión de las aguas, resulta encomiable. Esperamos que este reconocimiento de su labor haga meditar y reflexionar a los responsables públicos de aquellas decisiones contra las que él y otros tantos activistas y científicos han elevado su voz en demanda y exigencia de mayores dosis de cordura, participación pública y sensibilidad ambiental y social.

El movimiento por la nueva cultura del agua posee como objetivo primordial alterar los paradigmas clásicos aún vigentes en la gestión del agua en España. La Administración hidráulica española se consolida durante el franquismo como una organización al servicio del poder y de sus políticas de desarrollo tecnocráticas y subsidiarias al mantenimiento del régimen dictatorial. El agua de los ríos españoles, dominada y controlada por la presa, erigida en tótem hidráulico, se convertirá en elemento clave de control del territorio por parte de una Administración hidráulica que actuará como intermediaria de los dictados políticos del centralismo madrileño y de los poderes locales provinciales. Todas las carreteras y todos los ferrocarriles debían pasar por Madrid, pero ¿cómo forzar a los ríos en su marcha natural hacia el Mediterráneo o el Atlántico? Pues, controlando sus aguas con obras construidas y gestionadas por una Administración que bajo las órdenes del Gobierno central desplegaran sus tentáculos sobre las diferentes regiones españolas. Así nace y, desgraciadamente, se consolida y perpetúa la Administración hidráulica que aún gobierna nuestros ríos.

La lenta y parca democratización del estado español apenas alcanzará al funcionamiento real de estos órganos de gestión hidráulica. Formalmente, poseemos una Ley de Aguas, aprobada en el año 1985, cuyos principios y objetivos debían haber cambiado hace tiempo su funcionamiento de modo radical. Pero todavía, con mínimas modificaciones, la burocracia de las Confederaciones Hidrográficas y del Ministerio de Medio Ambiente se cree imbuida de la verdad absoluta sobre cómo fluye el agua, sobre cómo deben alterarse artificialmente sus flujos y a qué intereses deben servir. Contra esta perversión del sentido original de la legislación de las aguas actualmente vigente en nuestro país, y por una mayor racionalidad y

transparencia en sus decisiones, el movimiento por una nueva cultura del agua aboga por transformar radicalmente la visión y el concepto que sobre las aguas poseen tanto los ingenieros y funcionarios que las controlan, como los ciudadanos que las usan y han de vivir necesariamente junto con ellas y con los ecosistemas que en ellas habitan.

Nuestros gestores hidráulicos no aprecian conflictos de intereses y de valores, sino demandas de agua a satisfacer en toda hora y punto. La técnica hidráulica del cemento y del pozo se erige así, para ellos, en único elemento de mediación entre demandas que crecen exponencialmente y recursos hídricos que menguan por el abuso, el despilfarro y la contaminación. Su cultura del agua, obtenida por tan pobre, parcial y sesgada educación y experiencia con el agua, no les permite comprender, ni atisbar lo que tanta gente y tantos ciudadanos perciben y sienten; que las aguas son un bien público en cuya gestión desean participar aportando no sólo un voto o una opinión, sino nuevos valores democráticos, sociales y ambientales.

El movimiento contra la política del agua hoy imperante en nuestro país cada vez se hace más fuerte e influyente. Manifestaciones libres y desinteresadas contra el Plan Hidrológico Nacional y contra los trasvases de agua; huelgas y movilizaciones en el Pirineo en oposición a los nuevos embalses allí programados; continuos enfrentamientos con la población y los ciudadanos allí donde una Confederación decide construir una nueva presa –Itoiz (Navarra), Castrovido (Burgos), Biscarrúes, Yesa y Santaliestra (Aragón), Melonares (Sevilla), Alqueva (Portugal y España), Genal (Málaga), etc.-, en fin, un continuo bullir de ciudadanos en defensa de los valores ambientales, culturales, y también económicos, de sus ríos y acuíferos, por tomar las riendas de su desarrollo y contra las imposiciones basadas en espurios e indemostrables intereses generales cuyas políticas hidráulicas arruinarán el ya precario equilibrio hidrológico y ambiental de nuestra península.

Todas las revoluciones democráticas han surgido de la experiencia compartida en la creación de una nueva cultura: valores y sentimientos nacidos en la educación, de una *paideia* que altera las categorías perceptivas de la realidad social y política. La rancia cultura del agua de la Administración española tan sólo percibe el río como recurso para la economía global o para la presión política y electoral, y por ello, apuesta por la regulación artificial y despótica de sus aguas en detrimento de otras alternativas y respuestas más acordes con el nuevo espíritu y cultura de la sociedad. La interpretación que de la realidad hídrica nos ofrecen estos *gurús* de la técnica y del ingenio resulta de tan inaudita torpeza como la de Luis XVI y sus ministros ante la revolución francesa en ciernes. También nosotros esperamos que, pese a su irracionalidad, la fuerza y empuje de tantos movimientos sociales que defienden una política de las aguas alternativa, acabe configurando una cultura radical del agua más solidaria y atenta a los imperativos de la participación ciudadana y del medio ambiente.

Juan Manuel Ruiz García es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de Bakeaz.

